

Rechazo a que una empresa privada gestione la residencia pública de Movera

La Plataforma para la Defensa de las Personas Mayores critica que solo se tengan en cuenta cuestiones económicas

Los grupos de la oposición acusan al IASS de «desmantelar los servicios públicos»

ZARAGOZA. Colectivos sociales y los grupos parlamentarios de la oposición rechazaron ayer la propuesta del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de que una empresa privada gestione la residencia pública de Movera. La intención del Gobierno de Aragón es que la adjudicataria lleve a cabo las obras de reforma del edificio y se encargue de la administración de las instalaciones durante los próximos 10 años.

La Plataforma para la Defensa de las Personas Mayores (Plademar), que ha manifestado en varias ocasiones su oposición a cualquier privatización o cierre de esta resi-

dencia pública, mostró ayer su malestar y su indignación por el proceder del Gobierno de Aragón en esta cuestión. «Apostamos por la gestión pública al cien por cien. Solo tienen en cuenta cuestiones económicas y en ningún momento a los usuarios o trabajadores», aseguró María Luisa García, portavoz de Plademar.

Recordó que hace unas semanas visitaron el centro y aseguraron que, en su opinión, no son necesarias las obras de reforma que defienden los técnicos del IASS. «Se está dando un correcto servicio a los mayores», apostilló García, que explicó que ayer mismo tenían

previsto un encuentro con la responsable del IASS que fue postergado. Hoy mismo, este colectivo mantendrá una reunión con responsables de la comisión de mayores de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) para analizar la situación y valorar si van a emprender acciones de protesta al respecto.

Asimismo, Marea Naranja (especialmente dirigida a los servicios sociales) manifestó su rechazo a la «privatización de los servicios públicos». «Nos oponemos a cualquier idea en ese sentido», explicó uno de los miembros de esta plataforma.

Por su parte, los grupos parlamentarios de la oposición también fueron especialmente críticos con la idea del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de ofrecer a una empresa privada la gestión de una residencia pública. Para María Victoria Broto, del PSOE, este es un ejemplo más del «desmantelamiento de los servicios públicos». «El Gobierno de Aragón y

el consejero desmantelan todo y no cumplen con ninguno de los compromisos», apuntó Broto, que recordó que la oposición ya planteó una moción para que mientras hicieran las obras en la residencia de Movera todos sus usuarios y trabajadores se trasladasen a Utebo de manera provisional. Respecto al compromiso del IASS de invertir los dos millones que prevé ahorrar en la concertación de nuevas plazas, Broto se mostró escéptica. «Ya no nos creemos nada», recriminó.

Nieves Ibeas, de CHA, reconoció que el futuro de este centro público es la «crónica de una muerte anunciada» y criticó la destrucción de empleo público que supondrá este planteamiento. Mientras que para IU la privatización de este servicio supondrá «un mayor gasto para las arcas públicas, una merma de la calidad del servicio, la pérdida de trabajo público y una precarización del empleo privado», precisó Patricia Luquin.

C. F. B.